

día 11 al 13 estuvo adscrito permanentemente al apoyo del sistema de comunicaciones de las tropas golpistas, que era vital para éstas.

»La cobertura legal de las misiones de coordinación en comunicaciones de los militares golpistas se llamó "Mission Airstream". La tarea cumplida por el avión norteamericano permitió la conexión de estaciones de la Armada chilena, de una parte del Ejército y de la Fuerza Aérea.»³

Operación Pinzas

Sin embargo, no todo el mérito del infierno que se comenzaba a desencadenar sobre Chile era de los generales norteamericanos del Pentágono y del Comando Sur en la Zona del Canal de Panamá. Buena parte de los objetivos de la insurrección había nacido de las mentes de los conspiradores de más alto rango. Ese era el caso, por ejemplo, del vicealmirante José Toribio Merino Castro, autoascendido a almirante y a comandante en jefe de la Armada esa noche del 10 de septiembre, por la fuerza que dan las armas, y en pocas horas más tarde destinado a ser uno de «los cuatro» integrantes de la Junta Militar que comenzaría a gobernar un país ocupado militarmente, y en guerra permanente de un grupo de generales y su tropa contra un pueblo que había construido la democracia burguesa más sólida y duradera del continente latinoamericano. Una guerra declarada para destruir, arrasas, no dejar piedra sobre piedra de esa democracia chilena, impidiendo con ello, para defensa de una potencia imperialista extranjera y de los grandes señores del dinero en Chile, que ese pueblo creara una democracia más amplia, más sólida todavía.⁴

El «almirante» Merino Castro era un hombre de 57 años, graduado de la Escuela Naval de Playa Ancha (Valparaíso) en 1936. Años más tarde, al igual que todos los altos mandos militares de América Latina «destinados» a ser jefes de sus ejércitos, hizo una «larga práctica» en el aparato militar de los EE.UU. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió a bordo del buque de guerra *Raleigh*, de la Armada de los Estados Unidos, patrullando por la Zona del Canal de Panamá y Guadalcanal. Entre 1956 y 1957 fue adicto naval en Londres, y después oficial de Estado Mayor y profesor de Geopolítica y Logística.⁵

Merino Castro fue el primero de los altos mandos insurrectos

que se «sublevó» contra la idea de que una combinación de partidos de izquierda gobernara Chile. Ya en 1971 hacía oír su voz en la Academia Naval de Playa Ancha, para decir que «es un error de los americanos dejar que Allende gobierné». Y esa noche del 10 de septiembre de 1973, Merino Castro era un hombre orgulloso: estaba poniéndose en práctica un plan de «exterminio de la ideología marxista» por el cual había luchado muy duro desde 1972. Primero fue el general Gustavo Leigh Guzmán quien apoyó con toda su fuerza ese plan de exterminio. Después el general de división Augusto Pinochet Ugarte y, por último, el general de Carabineros César Mendoza Durán. Antes, en julio de 1973, cuando Merino Castro, a través de Gustavo Leigh y Augusto Pinochet, expuso los detalles de su plan a la Misión Militar de los EE.UU. en Santiago, ésta contestó que «le parecía bien», pero que la forma en que «ustedes se desembaracen de los rojos es problema de ustedes, no nuestro».

Días más tarde, cuando algunos jefes navales, después del golpe militar, hicieron ver su horror por la terrible matanza que estaba asolando al país, el almirante Merino Castro dio una tajante y breve definición, que recorrió los buques de la Armada como un escalofrío: «Nosotros somos los cirujanos del país. Cuando un enfermo tiene cáncer en una pierna, se le extirpa y se salva al paciente. Nosotros estamos extirpando el marxismo... Estamos haciendo una operación quirúrgica... Nuestra labor es humanitaria.»⁶

En junio de 1973, aun antes de que Augusto Pinochet fuera «invitado» por los demás altos mandos insurrectos para ser «jefe» en la sublevación militar que se estaba montando, los planes operativos de la ocupación armada del país estaban completos en su aspecto estrictamente bélico; pero no estaban completos en la parte de cómo mantener «políticamente» la ocupación militar del país por largos años. Claro, había acuerdo general en clausurar el Congreso Nacional, disolver la Central Única de Trabajadores, militarizar los sindicatos, fábricas del área de propiedad social, aparato administrativo y disolver todos los partidos políticos, comenzando por los de la Unidad Popular. Pero, ¿era eso suficiente?

Para Merino Castro eso no era suficiente. Para Merino Castro el problema estaba en «los comunistas como personas» y no en sus organizaciones. Él proponía un plan que llamaba orgullosamente de «los tres tercios». Decía que había que fusilar «en las primeras horas» de la «operación» a tres mil dirigentes medios

de todos los organismos y organizaciones de la Unidad Popular; detener, juzgar y condenar a prisión larga a otros tres mil dirigentes que tuvieran una fama pública muy conocida; y «exiliar» a otros tres mil políticos, profesionales y «gente intelectual», desde «la Democracia Cristiana a la izquierda». Con eso, decía Merino Castro, se garantiza «la paz social» por un decenio

Esta idea de Merino Castro no era nueva para él. Había comenzado a hablar de ella ya en marzo de 1973, en los círculos navales de Valparaíso, y cuando llegó a oídos de algunas personas de la izquierda en ese mismo mes (entre ellos el autor de este libro), el comentario fue «este pobre tipo está loco, es un nazi trasnochado... No se da cuenta de que está en Chile». La realidad, meses más tarde, probó que no era un nazi trasnochado, sino muy contemporáneo, con la diferencia de que su centro ideológico no hablaba en alemán, sino en inglés. Y probó también que la capacidad de barbarie de los seres humanos manejados por la ideología del imperialismo no tiene límites.

Contra la idea de Merino Castro se oponía solamente la de un grupo de generales en el Ejército, del seno de los «reformistas», que estimaban que una acción así provocaría una reacción de «odio contra los militares, que nos costará estar en guerra de guerrillas durante todo el tiempo que nos mantengamos en el poder». Pero los sucesos de marzo, abril, mayo y junio de 1973, que vimos en detalle en los capítulos anteriores, demostraban la profundidad, las hondas raíces que el deseo de liberación nacional había tomado en el pueblo, y ello fue decisivo en la decisión. Los generales y almirantes complotadores estimaron que los chilenos estaban «enfermos» de revolución, que eso era lepra, y como en la Edad Media, había que quemar a los leprosos para sanear el ambiente.

Y desde fines de junio comenzó a perfeccionarse el plan de «los tres tercios» de Merino Castro. Se codificaron las listas de «extremistas», «dirigentes», «políticos de izquierda», «periodistas marxistas», «agentes del comunismo internacional», y toda persona que participara con alguna fuerza en organizaciones vecinales, comunales, sindicales o nacionales, que tenían preparadas desde octubre-noviembre de 1972 los Servicios de Inteligencia del Ejército, la Marina y la Aviación. Se pidió ayuda al Pentágono para que se le proporcionaran al Ejército chileno las listas de la Agencia Central de Inteligencia... ¡de chilenos vinculados con los países socialistas!, y se trabajó con la meta de separar dos niveles: las personas no conocidas públicamente,

o conocidas relativamente poco, pero que eran importantes en las organizaciones de todo tipo de la izquierda; y las personas conocidas públicamente en un grado importante, incluyendo funcionarios estatales de categoría de la Administración Allende.

A los primeros se les llamó, por indicación de Merino Castro, «motores del marxismo». A los segundos, «dirigentes del marxismo». Ya a principios de agosto, las listas estaban bastante completas, y el plan de «los tres tercios» de Merino Castro tomó una dimensión apocalíptica.

Se llegó a la conclusión de que los «motores del marxismo» eran unos veinte mil chilenos, que iban desde estudiantes universitarios hasta personas de edad avanzada, ya jubilados de sus trabajos pero con una vida de participación en la comunidad muy activa. Estos eran los que había que detener y fusilar en las primeras horas, o días, del golpe militar.

Los «tres mil» de Merino Castro se habían transformado en «veinte mil», ya en agosto de 1973.

Los de la segunda lista, los «dirigentes del marxismo», en cambio, no fueron sorpresa para el almirante Merino Castro. Su suma no sobrepasaba los tres mil. A éstos, se acordó, había que apresarlos, juzgarlos por el mero hecho de haber deseado una democracia mejor para su pueblo y condenarlos a prisión larga.

Los altos mandos militares encontraban que esta idea era muy buena porque «si damos de baja a los dirigentes tan conocidos, se nos va a acusar de dictadores en todo el mundo». Y en cambio, pensaban, si exterminaban a los desconocidos, pero verdaderos movilizados de los obreros, campesinos y empleados, entonces, «nadie nos preguntará por ellos».

Así, a fines de agosto, estaba todo tan calculado, tan a punto de ponerse en práctica por parte de los generales y almirantes insurrectos, que la operación, en realidad, parecía lo que era en esencia: los preparativos secretos de la invasión militar de otro país, para apoderarse de él definitivamente.

Cuando en la noche del 10 de septiembre los infantes de marina comenzaron a ocupar Valparaíso, como primera fase de la ocupación de todo el país, los generales y almirantes tenían metas específicas a cumplir en su *blitzkrieg*:

1) Cazar y asesinar a veinte mil personas, cuyos nombres figuraban en listas distribuidas previamente a todos los mandos de las veinticinco provincias. La meta para las primeras horas del golpe eran seis mil personas de esas listas.

2) Detener y confinar en campos de concentración, previamente designados, a tres mil personas más.

3) Ocupar militarmente todos los centros administrativos, económicos y políticos del país.

4) Prepararse para un combate de cinco a seis días, que hacía suponer un presupuesto de bajas de «cincuenta mil personas», de las cuales las Fuerzas Armadas militares podían soportar una parte «no mayor» de dos mil hombres, para asegurar la operación. (Sobre estos puntos, en declaraciones públicas posteriores a la masacre, los jefes militares incurrieron en algunas divergencias. Por ejemplo, el general Gustavo Leigh, en el diario «La Tercera», de Santiago, del día 17 de septiembre de 1973, declaraba: «Actuamos así porque es preferible que haya CIENTO MIL MUERTOS en tres días y no un millón en tres años, como ocurrió en España.» Y el general Augusto Pinochet, en entrevista por televisión en red nacional, en octubre de 1973, decía: «La resistencia se desmoronó rápidamente. Nosotros esperábamos, estábamos preparados para que ellos resistieran cinco días... No fue así, podría haber habido CINCUENTA MIL MUERTOS.»)

En todo caso, es importante ver lo siguiente: los cuatro objetivos básicos de la *blitzkrieg*, que abrió las puertas del infierno sobre Chile el 11 de septiembre, demuestran que los militares insurrectos estaban actuando sobre seguro, que ellos «sabían» que se iban a enfrentar con un pueblo desarmado, o pobremente armado, por sorpresa, sin siquiera sospechar la invasión militar, y que su resistencia a la masacre iba a ser solamente la resistencia que da la desesperación frente a la muerte segura. Por eso calculaban un máximo de UN SOLDADO muerto por cada VEINTICUATRO CIVILES. Esto es bueno recordarlo para quien tenga en mente el supuesto Plan Zeta esgrimido como excusa por los generales y almirantes.

Con el correr de los meses, después del inicio del genocidio en la noche del 10 de septiembre de 1973, la situación se haría tan brutal, que incluso el cardenal de la Iglesia Católica chilena, arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez, declararía públicamente, tomando un gran riesgo personal, lo siguiente: «Creemos que no se hará la paz de Chile sobre la base de LA DESTRUCCIÓN DE UNA PARTE NUMEROSA DE LOS CHILENOS» («Ericilla», número 2002, 12 diciembre de 1973. Esta revista es democratacristiana, del grupo de Eduardo Frei).⁷

No obstante, a pesar de la preparación minuciosa del asesi-

nato de los veinte mil chilenos de la lista manejada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, a pesar de la sorpresa con que se lanzó la maquinaria de muerte sobre este grupo de chilenos tan grande, y a pesar de la falta de preparación de las organizaciones populares para resistir con éxito una matanza de esa magnitud, los resultados de las primeras veinticuatro horas de la operación exterminio de los «motores del marxismo» fue un fracaso relativo para los generales y almirantes.

De acuerdo a cifras aproximadas, conseguidas por el propio autor de este libro y por amigos de él que arriesgaron su vida para informarlo en los días inmediatamente posteriores a la insurrección, en el primer día de operaciones (el 11 de septiembre), sólo lograron asesinar a poco más de tres mil personas.

Un detalle tentativo, provincia por provincia, de esos resultados estimados «no satisfactorios» por el Estado Mayor incorrecto, es el siguiente:

Provincia de Tarapacá: 80 dirigentes medios asesinados, de un total buscado de 400. La región fue invadida por las tropas al mando del general de brigada Carlos Forrestier Haengsgen y el coronel Odlanier Mena Salinas.

Provincia de Antofagasta: Alrededor de 80 asesinados, después de ser cazados en sus propios domicilios, de un total buscado de 400, más o menos. Las Fuerzas Armadas de ocupación estaban al mando del general de brigada Joaquín Lagos Osorio y el coronel Eugenio Rivera Desgroux.

Provincia de Atacama: De un total aproximado de 1.000 nombres inscritos en la lista de exterminio, sólo consiguieron cazar y asesinar a unos 100 dirigentes.

Provincia de Coquimbo: 100 asesinatos de un total presupuestado de 200.

Las provincias de Atacama y Coquimbo estaban al mando de los tenientes coroneles Oscar Haag Blaschke y Ariosto Lapostol Orrego.

Provincia de Aconcagua: 100 asesinatos de un total buscado de 500. Las tropas genocidas estaban al mando del coronel Héctor Orozco Sepúlveda.

Provincia de Valparaíso: 250 asesinatos de un total buscado aproximadamente de 2.000. La ocupación militar estaba al mando del contralmirante Adolfo Walbaum Wieber.

Provincia de Santiago: De una lista para cazar y asesinar de cerca de 6.500 personas, los comandos de exterminio consiguie-

ron matar «sólo» a unos 800 miembros de organizaciones civiles de izquierda. El jefe militar de las tropas invasoras era el general de brigada Herman Brady Roche.

Provincia de O'Higgins: Alrededor de 80 cazados y ejecutados, de un total buscado de unos 600. Al mando de los invasores estaba el teniente coronel Cristian Ackercknecht.

Provincia de Colchagua: Los comandos de exterminio consiguieron matar a unos 100 civiles de un total buscado cercano a los 500. Comandaba las tropas invasoras el coronel Hernán Brantes Martínez.

Provincia de Curicó: De una lista para exterminar a 300, consiguieron cazar y ejecutar a unos 50. Jefe militar: teniente coronel Sergio Angelotti Cádiz.

Provincia de Talca: Los comandos militares asesinos tenían una lista que bordeaba las 400 personas. Asesinaron a 80. Jefe militar: el teniente coronel Efraín Jaña Girón.

Provincia de Linares: Cerca de 20 asesinados de un total programado de 100. Jefe militar: coronel Gabriel del Río Espinosa.

Provincia de Maule: De un total buscado de cerca de 100 civiles, lograron cazar y asesinar a unos 20. Jefe militar: teniente coronel Rubén Castillo Whyte.

Provincia de Ñuble: La lista de exterminio pasaba de los 500. A la medianoche del día 11 de septiembre informaron a la central de Inteligencia en Santiago, que sólo habían conseguido «dar de baja» a 98 de los buscados. Jefe de las fuerzas de ocupación: coronel Juan Toro Dávila.

Provincias de Concepción y Arauco: Bajo el mando conjunto del general de brigada Washington Carrasco Fernández y el contralmirante Jorge Paredes Wetzer. En Concepción, de un total buscado de 2.000 civiles, lograron asesinar cerca de 250. En la provincia de Arauco, de un total buscado de alrededor de 500, asesinaron cerca de 100.

Provincia de Bío Bío: 120 cazados y asesinados de un total buscado de más o menos 800 personas. Jefe militar: coronel Alfredo Rehren Pulido.

Provincia de Malleco: De un total aproximado de 400 buscados, las fuerzas de ocupación lograron cazar y ejecutar a unos 80. Jefes militares: tenientes coroneles Elías Bacigalupo Soracco y Alejandro Morel Donoso.

Provincia de Cautín: 150 ejecuciones de un total programado de 600. Jefes militares: coronel Hernán Ramírez Ramírez y teniente coronel Pablo Iturriaga Marchesse.

Provincia de Valdivia: La lista de «motores del marxismo» tenía alrededor de 200 nombres. Se logró la captura y muerte de cerca de 40. Jefe de las fuerzas invasoras: el general de brigada Héctor Bravo Muñoz.

Provincia de Osorno: Las fuerzas invasoras, a cargo del teniente coronel Lizardo Simón Abarca Maggi, lograron la captura y muerte de alrededor de 140 civiles de un total buscado cercano a los 600.

Provincias de Llanquihue y Chiloé: El jefe de las fuerzas de ocupación era el coronel Sergio Leigh Guzmán (hermano del integrante de la Junta Militar, Gustavo Leigh Guzmán). Se consiguió la caza y asesinato de más o menos 115 personas, de un total aproximado de 400 personas buscadas en las dos provincias.

Provincia de Aisén: Fueron cazados y capturados 10 «motores del marxismo», de una lista de alrededor de 200 buscados. Jefe militar: coronel Humberto Gordon Rubio.

Provincia de Magallanes: El jefe militar era el general de división Manuel Torres de la Cruz, cuyas fuerzas «sólo» consiguieron asesinar a unas 100 personas, de un total inscrito en «las listas» de alrededor de 500.

En términos estadísticos, la efectividad de los comandos asesinos de los Servicios de Inteligencia Militares, a pesar de estar siendo asesorados por las unidades «independientes» de civiles de los grupos fascistas, que funcionaban barrio por barrio en las ciudades, era muy baja.

Esto, al parecer, decidió a los generales y almirantes insurrectos a desatar sobre la población civil considerada como «cancerosa» una represión sin límites, bajo la forma de apresamiento masivo, instalación de lugares de torturas propias de la época nazi en Europa y campos de concentración en toda la nación.

En los primeros 18 días tras el 11 de septiembre había solamente en Santiago casi 20000 civiles presos. Y en todo el país, esta cifra llegaba a los 75000; era una desesperada búsqueda de todos los componentes de la lista de los «veinte mil».

De acuerdo a cifras aproximadas, desde el 12 al 30 de septiembre, de entre las decenas de miles de prisioneros, los generales y almirantes insurrectos lograron detectar a otros 6300 integrantes de las listas de los Servicios de Inteligencia, que fueron fusilados en el interior de los mismos campos de concentración. Esto dejó la efectividad de los comandos asesinos a poco menos del 50 % para el total de veinte mil. Esto fue lo que se llamó Operación Pinzas.

Por otro lado, en los primeros cinco días después del comienzo de la ocupación militar, la defensa desesperada y descoordinada de algunos grupos de trabajadores contra la maquinaria bélica lanzada contra ellos, dejó unos 500 muertos civiles «caídos en combate», contra alrededor de 500 miembros de las tropas bajo mando fascista, entre los cuales se contaban los oficiales y soldados asesinados en la misma mañana del 11 de septiembre y días posteriores, por negarse a obedecer las órdenes de salir a las calles y caminos y masacrar al pueblo chileno. Cerca de 100 oficiales y soldados cayeron en esta forma, fusilados por sus propios compañeros de armas.

Todo esto hace una cuenta homicida de casi 15.000 víctimas civiles en los primeros 18 días del desencadenamiento del infierno sobre Chile. Es decir, unos 740 muertos por día. O, de otro modo, 30 víctimas por hora; es decir, ¡UN ASESINATO CADA DOS MINUTOS!⁸

Después de esta primera lluvia torrencial de muerte sobre los chilenos, los asesinatos se hicieron más espaciados a medida que las dificultades para los comandos asesinos se hacían mayores por la reorganización del pueblo, que comenzó a burlar en parte la maquinaria destructiva montada, por encargo del Pentágono, por los generales y almirantes chilenos.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1973, los oficiales insurrectos asesinaron a un promedio de 30 a 40 personas por semana, aplicando métodos tan sutiles como «la ley de fuga».

Una crónica transmitida el 15 de noviembre para el diario «Excelsior», de México, por su corresponsal en Buenos Aires, Giangiacomo Foa, dibuja ese rincón del infierno en aquellos meses. Su texto, resumido, es el siguiente:

«En Chile sigue aplicándose “la ley de fuga”. Todos los días, todas las noches, la Junta Militar que gobierna Chile ejecuta en nombre de los sagrados derechos humanos, la libertad, la democracia y la religión a decenas de ciudadanos chilenos cuyo único delito consiste en haber sido partidarios del Gobierno socialista del extinto presidente Allende. La paz que busca implantar Pinochet es la paz de los sepulcros.

»Las palabras que siguen son de la abogada Carmen Hertz. Su esposo, Carlos Berger, que fue jefe de la empresa de cobre de Chuquicamata, acaba de ser fusilado en la cárcel de Calama junto con veintiséis obreros del cobre. La Junta Militar de Chile sigue implacable con sus prisioneros de “guerra”. “Estuve con

él hasta las 16,30 horas. Conversamos largo rato. Estaba tranquilo, sabiendo que sólo le restaban 20 días para cumplir la condena que le había impuesto pocos días antes el consejo de guerra. Nunca llegó a pensar que 90 minutos más tarde sería fusilado.”

»El relato de Carmen Hertz no difiere mucho del que hacen centenares de víctimas que han visto destruidos sus hogares, sus familias y su vida, cuando la furia represora del Gobierno de Pinochet se ensaña en sus seres queridos. En Chile, los perfumes nacionales se han vuelto la pólvora y la sangre. La “ley de fuga” es el pan macabro de todos los días: “Al inquirir por mi esposo me contestaron lacónicamente que había sido muerto cuando, en compañía de otros veinticinco prisioneros, intentaba fugarse. Creí volverme loca cuando me confirmaron la noticia que había recibido un día antes, pero a la que no podía dar crédito. Me habían dicho la víspera que todos los prisioneros que estaban en la cárcel de Calama habían sido sacados sorpresivamente de sus celdas y llevados a un lugar denominado Topater, campo de entrenamiento de tiro de los militares acantonados en esa región fronteriza con Bolivia. Luego logré obtener del médico forense de Calama el certificado de defunción de mi esposo. Allí se establece como causal de la muerte la destrucción del tórax y la región cardíaca por fusilamiento.” Junto con Berger murieron esa tarde David Miranda, ex dirigente nacional de la Federación Minera; dos periodistas de radio El Loa y el resto obreros. Pero el ajusticiamiento de Calama es sólo uno más de una sangrienta serie de sucesos inconfesables.

»En el cuartel de La Serena se mató a quince ciudadanos. Entre ellos ejecutaron al director del Conservatorio de Música, Jorge Peña, y al médico pediatra Jorge Jordán. En las afueras de Antofagasta, el 19 del mes pasado, fueron fusilados otros veintidós patriotas chilenos. Entre ellos estaba un primo de la esposa del ex presidente Eduardo Frei. **TODOS LOS FUSILADOS HABÍAN SIDO CONDENADOS POCOS DÍAS ANTES A RECLUSIÓN CARCELARIA**, con penas que iban de dos meses a cuarenta años. Pero la Junta los prefirió muertos.:

»Mientras la Junta Militar celebrada los dos meses del derrocamiento del Gobierno socialista, un largo convoy de vagones jaulas, utilizados habitualmente para transportar ganado, conducía novecientos presos políticos a la oficina salitrera de Chacabuco, recientemente convertida en campo de concentración. Los detenidos tendrán que soportar los rigores de un clima de-

sértico: la salitrera fue convertida hace dos años en monumento nacional por el presidente Allende.»

Sin embargo, el infierno no terminó para los chilenos con el final de 1973. Todavía en abril de 1974, al completar casi siete meses del derrocamiento del Gobierno constitucional por parte de los generales en contacto con el Pentágono, la situación era horrible. La agencia norteamericana Associated Press, el primero de abril, transmitía desde Santiago de Chile la siguiente noticia:

«Dirigentes religiosos católicos, luteranos y judíos de Chile apelaron ante los tribunales en favor de ciento treinta y una personas de las que, dicen, nada se sabe desde que fueron arrestadas por fuerzas del orden en los últimos meses. La petición fue hecha por monseñor Fernando Ariztía Ruiz, obispo auxiliar de la Archidiócesis Católica de Santiago; Helmuth Frenz, obispo evangélico luterano; Ángel Kreitman, gran rabino de Chile, y varios otros dirigentes.

»El documento fue presentado el viernes pasado como recurso de amparo (*habeas corpus*), en nombre de un Comité de Cooperación para la Paz ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

»Expresa que su objetivo es salvaguardar la integridad física y moral de tantas personas que hoy se encuentran privadas de libertad y reclusos en sitios que se mantienen secretos para sus parientes y amigos e inaccesibles, por ende, a una justa y adecuada defensa pública.»

»El recurso de amparo de los dirigentes religiosos fue presentado en favor de los presuntos perseguidos, entre los cuales no figuran nombres de resonancia pública. “El drama humano que están viviendo tantas madres, esposas, hijos, parientes y amigos ha movido al Comité de Cooperación para la Paz en Chile a presentar en favor de personas arrestadas, y no ubicadas hasta hoy, el presente recurso de amparo”, dice el documento.

»Agrega que “nos ha conmovido, en nuestra condición de pastores, el dolor y la angustia de tantas personas inocentes, pobres y humilladas en su inmensa mayoría, desprovistas de todo relieve social, sin nombre conocido y sin influencias importantes. El caso de cada una de las personas por quienes recurrimos hoy de amparo ha sido estrictamente estudiado y sometido a comprobación no sólo por los parientes o amigos de los recurridos, sino además por un cuerpo de abogados y asistentes sociales”.

»Aun cuando muchos de los casos citados en la apelación habrían ocurrido poco después del levantamiento militar de septiembre pasado, otros son más recientes, según el documento. Entre ellos menciona a una madre de dos hijos, identificada como Amapola Lizette Ruiz, de 29 años, quien habría sido detenida el 17 de marzo último por cinco soldados en un barrio modesto de la capital. Agrega el documento que su hermana la ha estado buscando desde entonces sin éxito.

»Cita también el caso de Sergio Héctor Salinas Tamayo, de 48 años de edad, casado. Dice que fue arrestado en una fábrica hace tres semanas por cinco personas que se identificaron como agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Agrega que los esfuerzos de sus parientes para tratar de averiguar su paradero fueron infructuosos "a pesar de haber visitado sitios de detención, cárceles, estadios, morgue, hospital, etc"

»Otro caso mencionado es el de un empleado de servicio de energía eléctrica de Santiago, Luis Alberto Gerlach Zúñiga, de 23 años, de quien afirma que ha sido arrestado el 27 de febrero sin que se sepa nada de él».

Todo lo anterior no es más que un pálido reflejo de lo que comenzó a ocurrir desde el momento que los generales y almirantes en contacto con el Pentágono decidieron cometer un genocidio con un tercio de la población chilena para salvaguardar los intereses económicos de un puñado de oligopolios del dólar.

El asesinato de civiles indefensos, así, ha pasado a ser más que un castigo, un alivio para los centenares de miles de hombres, mujeres, ancianos e incluso niños brutalmente torturados cotidianamente por la maquinaria montada por el almirante Merino y los generales Leigh, Mendoza y Pinochet.

Las torturas

A principios del mes de noviembre de 1973, los pocos campesinos que transitaban por el Puente Las Tejuelas, a dos o tres kilómetros de Chillan, sobre el río Ñuble, se dieron cuenta que ya las aguas comenzaban a bajar por el cese de la época de las lluvias. Y junto con ese fenómeno visto tantas veces, otro, nuevo y horroroso: la aparición de decenas de cadáveres de personas sin cabeza, degolladas, con las manos atadas a la espalda. Muchos de los cadáveres estaban semipodridos; otros no tanto. Los campesinos fueron a avisar al puesto de Carabineros de la